

**REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



**JUZGADO TREINTA DE FAMILIA**

**Bogotá D. C., treinta (30) de octubre de dos mil veinte (2020)**

**Rad: 11001-31-100-30-2020-00379-00**

**Clase de proceso: Acción de Tutela**

Procede este Despacho a proferir sentencia dentro de la Acción de Tutela instaurada a nombre propio por la ciudadana **JULIANA MARGARITA VILLALBA** identificada con la C.C 52.866.228 en calidad de representante legal de la sociedad comercial **REBUS TECHNOLOGY S.A.S** contra la **PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN**.

**ANTECEDENTES**

La ciudadana **JULIANA MARGARITA VILLALBA** identificada con la C.C 52.866.228 en calidad de representante legal de la sociedad comercial **REBUS TECHNOLOGY S.A.S**, inicia acción de tutela contra la **PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN**, por considerar que se le está vulnerando el derecho al **DEBIDO PROCESO POR MORA JUDICIAL INJUSTIFICADA**.

**HECHOS Y PRETENSIONES**

Que el 21 de marzo de 2017, la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A E.S.P expidió el manual de contratación, a través del cual se regularon todos los actos y contratos de ETB en calidad de contratante; dentro del manual se establecieron las distintas modalidades de contratación, dentro de las cuales se encuentran: 1) selección directa; 2) invitación privada; 3) invitación pública ;4) selección simplificada; la modalidad de selección directa es el *“procedimiento de contratación mediante el cual se cursa invitación a un único oferente para que presente propuesta a ETB, de conformidad con la exigencia, requisitos y demás condiciones dispuestos en los términos de referencia”*.

Dada la emergencia sanitaria decretada en marzo de 2020 por el Covid 19, la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A E.S.P modifico su cronograma de realización de encuentros ciudadanos, incluyendo la manera en que se efectuaría, la cual ya no sería presencial sino virtual, lo que llevo a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A E.S.P adelantar un proceso de contratación para la realización de asambleas digitales (para dar cumplimiento a los requerimientos del Fondo de Desarrollo Local).

Manifiesta que para la contratación del servicio del Sistema Integrado de Asambleas Digitales (para dar cumplimiento a los requerimientos del Fondo de Desarrollo Local), la Empresa de Telecomunicaciones S.A. E.S.P realizó un proceso de selección directa, identificado con el No. 10434350, enviándole una carta a **REBUS TECHNOLOGY S.A.S**, y dada la necesidad y urgencia de dar inicio a los eventos de manera previa a la legalización del contrato, se dio

inicio anticipado a la ejecución del servicio por medio de la cual la accionante presto su plataforma para la realización de asambleas digitales.

Señala que, dentro del trámite de legalización del contrato, el 10 de julio de 2020, la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P envió a **REBUS TECHNOLOGY S.A.S** los términos de referencia del proceso de selección directa No. 10434350, invitando a prestar oferta para “(...) contratar la prestación del servicio del Sistema Integrado de Asambleas Digitales, con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos del cliente FONDOS DE DESARROLLO LOCAL”; y en comunicado No. GCGC- 194- 2020 del 21 de julio de 2020, se le adjudicó el contrato No. 4600018094.

Que el 24 de julio de 2020, se suscribió el acta de inicio del contrato No. 4600018094 entre **REBUS TECHNOLOGY S.A.S** y la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P, en el cual se impartió la orden respectiva por parte del supervisor Juan Carlos Silva Castillo.

Indica que si bien la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P solicito el inicio del contrato de manera anticipada, la interventoría se negó a realizar el pago de los servicios prestados antes de la suscripción de la orden de inicio “Desde la supervisión del contrato se puede autorizar el pago al proveedor de las actividades ejecutadas a partir de la orden de inicio 29-07-2020, lo que corresponden a 31 eventos”.

Señala que el 20 de septiembre de 2020, se suscribió acta de recibo a satisfacción entre **REBUS TECHNOLOGY S.A.S** y el supervisor del contrato.

Que tras diversas reuniones con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P, se llegó a la conclusión que, en aras de reconocer y proceder con el pago de los servicios prestados antes del 23 de julio de 2020, sería necesario agotar un procedimiento de conciliación extraprocesal; por lo que el 28 de septiembre de 2020, se radicó por la sede electrónica la solicitud de conciliación extraprocesal; no obstante, desde la fecha de radicación hasta el día de hoy, no se ha recibido respuesta de la solicitud sin ni siquiera asignarse a un Procurador.

Finalmente, indica que tras distintas consultas del expediente en sede electrónica registra sin novedad, por lo que se decidió comunicarse a la línea de la Procuraduría General de la Nación el 07 de octubre de 2020, informándose que aún no se había entregado el expediente a ningún procurador y que se debía esperar, pues el procedimiento podría tardar hasta 5 meses.

En razón a lo anterior pretende que el Juzgado tutele el derecho al **DEBIDO PROCESO POR MORA JUDICIAL INJUSTIFICADA** y se ordene a la **PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN** dar trámite a la solicitud de conciliación extraprocesal radicada por sede electrónica el día 28 de septiembre de 2020.

## PRUEBAS

La parte accionante anexa a su solicitud, los siguientes documentos:

- Certificado de Existencia y Representación Legal **REBUS TECHNOLOGY S.A.S**
- Resultado de consulta 15 de octubre de 2020.

-Escrito dirigido a la Procuraduría General de la Nación.

## **ACTUACIÓN PROCESAL**

1.- Mediante auto proferido el 19 de octubre de 2020, este Despacho Judicial rechazó las diligencias por falta de competencia y dispuso remitirlas al Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá; sin embargo, en providencia del 23 de octubre de 2020, el Ad-quem ordenó la remisión a este Despacho para que se tramite y falle.

2.- En estricto cumplimiento, mediante auto del 28 de octubre de 2020, se ordenó dar trámite a la acción, y en consecuencia la notificación a la **PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN**, para que en el término de dos (2) días se pronunciara sobre los hechos materia de la presente acción.

3.- El 28 de octubre de 2020, se notificó a la **PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN**, a través del correo institucional del Juzgado, informando sobre la admisión de la presente tutela, adjuntando copia de la referida solicitud.

4.- La **PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN**, brindó contestación a la acción constitucional dentro de la oportunidad conferida.

## **CONTESTACIÓN PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.**

La entidad accionada, refirió: “(...) En el caso particular, la Procuraduría General de la Nación comunicó la decisión a la empresa accionante y fue la misma la que no ha actuado de forma diligente subsanando la solicitud de conciliación

Además, la empresa accionante desconoce la normatividad vigente para la realización de conciliaciones prejudiciales.”.

## **CONSIDERACIONES**

### **Aspectos preliminares**

Este Juzgado es competente para conocer de la presente acción, por mandato de los artículos 86 de la Constitución Nacional, 37 del Decreto 2591 de 1991; numeral 1°, inciso 2°, del Decreto 1382 de 2000; y 38 de la Ley 489 de 1998.

La solicitud satisface las formalidades legales y no se advierten anomalías que invaliden lo actuado, lo cual habilita al Despacho para decidir de fondo el asunto.

### **Naturaleza jurídica de la acción de tutela**

La jurisprudencia constitucional ha pregonado de antaño que la acción de tutela fue instituida como un mecanismo extraordinario para la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violación que pueda derivarse de la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, en los casos previstos en la ley, sin que pueda erigirse en una vía sustitutiva de los medios ordinarios de defensa que el ordenamiento jurídico ha consagrado para salvaguardarlos.

Es claro, entonces, que este instrumento judicial se torna improcedente cuando la persona afectada tuvo o tiene la oportunidad de obtener la protección del derecho que estima amenazado, por los cauces ordinarios y ante las autoridades competentes, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

### **Procedencia de la acción de tutela.**

El art. 86 de la Constitución Política de Colombia, dispone: *“Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”.*

En el caso bajo examen, la ciudadana **JULIANA MARGARITA VILLALBA** identificada con la C.C 52.866.228 en calidad de representante legal de la sociedad comercial **REBUS TECHNOLOGY S.A.S**, se encuentra legitimada en la causa por activa para interponer la acción de tutela, en virtud del artículo 86 de la Carta Política y por ejercer la defensa de los derechos de la persona jurídica que representa.

Por su parte, la legitimación por pasiva dentro del trámite de amparo hace referencia a la capacidad legal del destinatario de la acción de tutela para ser demandado, pues está llamado a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental en el evento en que se acredite la misma en el proceso. En el asunto de la referencia, la acción se dirige contra **PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN**, de quien se solicita cese su presunto actuar vulnerador.

### **INMEDIATEZ**

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución, la acción de tutela puede interponerse “en todo momento” porque no tiene término de caducidad.

La Corte Constitucional en Sentencia T-044/19 señaló, frente a este requisito: “El requisito de la inmediatez pretende entonces que exista “una correlación temporal entre la solicitud de tutela y el hecho judicial vulnerador de los derechos fundamentales”, de manera que se preserve la naturaleza de la acción de tutela, concebida como un remedio de aplicación urgente que demanda una protección efectiva y actual de los derechos invocados.

Sobre el particular es preciso señalar que el 28 de septiembre de 2020, se radicó en sede electrónica la solicitud de conciliación extraprocésal; y el 16 de octubre de 2020 se presentó acción constitucional, razones suficientes para considerar que la accionante dejó transcurrir un tiempo prudencial para impetrar la presente acción constitucional.

### **SUBSIDIARIEDAD**

El Decreto 2591 de 1991 establece expresamente que solo procede la tutela cuando “el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial”. Entonces, la procedencia de la acción se encuentra condicionada por el principio de subsidiariedad, bajo el entendido de

que no puede desplazar los recursos ordinarios o extraordinarios de defensa, ni mucho menos a los jueces competentes en la jurisdicción ordinaria o contencioso administrativa.

El Despacho advierte que con la interposición de la tutela se busca la protección del **DEBIDO PROCESO POR MORA JUDICIAL INJUSTIFICADA** y es la vía que encuentra la accionante para asegurar su ejercicio.

### **Derecho Fundamental Invocado Como Vulnerado.**

“La jurisprudencia constitucional ha definido el **DERECHO AL DEBIDO PROCESO** como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. Hacen parte de las garantías del debido proceso: (i) El derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre e igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al cumplimiento de lo decidido en el fallo; (ii) el derecho al juez natural, identificado como el funcionario con capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación, de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la ley; (iii) El derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando sea necesario, a la igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas las demás personas que intervienen en el proceso; (iv) el derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable, lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido a dilaciones injustificadas o inexplicables; (v) el derecho a la independencia del juez, que solo es efectivo cuando los servidores públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar justicia, ejercen funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo y (vi) el derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes siempre deberán decidir con fundamento en los hechos, conforme a los imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas”. (Sentencia C 341-14)

### **PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JURÍDICO.**

Corresponde a esta juzgadora determinar si la **PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN** vulneró los derechos al **DEBIDO PROCESO** a la sociedad comercial **REBUS TECHNOLOGY S.A.S** representada legalmente por la ciudadana **JULIANA MARGARITA VILLALBA** identificada con la C.C 52.866.228 al no dar trámite a la solicitud de conciliación extraprocesal radicada por sede electrónica el día 28 de septiembre de 2020.

Dentro de los hechos del plenario, obra escrito dirigido a la Procuraduría General de la Nación con solicitud de conciliación extrajudicial.

De la contestación de la demanda, dada por la accionada se lee: “ La empresa convocante radicó en la Procuraduría General de la Nación solicitud de conciliación prejudicial la cual quedo identificada con la radicación No. 163- 2020 SIGDEA E 2020- 502557.

El 15 de octubre de 2020, la Procuraduría 86 Judicial I para Asuntos Administrativos emitió auto inadmitiendo la solicitud indicando lo siguiente:

1. Que el día 30 de septiembre de 2020<sup>1</sup>, en forma virtual, la doctora JULIANA MARGARITA VILLALBA, en nombre y representación de REBUS TECHNOLOGY SAS, presento solicitud de conciliación extrajudicial, convocando a la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A ESP.

2. Que una vez examinada la solicitud de conciliación, se advierte que no se evidencia que la doctora JULIANA MARGARITA VILLALBA en su calidad de Representante Legal de la convocante sea abogada ni se allega poder otorgado por ella a ningún profesional de derecho, esto de conformidad con lo dispuesto por el parágrafo 3 del artículo 1 de la ley 640 de 2001, que reza (...) Por lo anterior, se requiere a la señora JULIANA MARGARITA VILLALBA que la solicitud de conciliación sea presentada ante este Despacho por apoderado, respecto de quien además debe allegar poder original y debidamente otorgado de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Decreto 806 de 2020, para continuar con el trámite conciliatorio.

Acto seguido se le notifico vía correo electrónico a Rebus Technology esta decisión el 16 de octubre de 2020 informándole lo siguiente:

De manera atenta me permito informarle que la Procuraduría 86 Judicial I para Asuntos Administrativos, profirió el auto No. E-2020- 502557, del cual adjunto copia, por cuya virtud ordeno subsanar la solicitud de conciliación extrajudicial de la referencia dentro de los cinco (05) días siguientes al recibo del presente escrito, so pena de entenderse que desiste de la solicitud y tenerla por no presentada. La corrección también deberá presentarse con la constancia de recibo por el convocado. Lo anterior de acuerdo con la Ley 1564 /2012 art. 613 en concordancia con el decreto 1365/2013 en lo relacionado con la comunicación a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

En atención a Decretos Legislativos No. 491 del 28 de marzo de 2020, 564 del 15 de abril de 2020 y 806 del 04 de junio de 2020, la Resolución No. 0127 del 16 de marzo de 2020, el Memorando Informativo No. 2 de 19 de marzo de 2020 suscrito por el Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa, Resolución No. 143 de 2020, el artículo 2 de la Resolución No. 193 de 30 de abril de 2020, Resolución 259 del 01 de julio de 2020, Resolución 312 del 29 de julio de 2020, Resolución 0358 del 31 de agosto de 2020 y Resolución 412 del 9 de octubre de 2020 suscritas por el Procurador General de la Nación, en donde se adoptan medidas para asegurar la prestación del servicio público en la conciliación extrajudicial en materia de lo contencioso administrativo en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional por causa del COVID-19 (coronavirus), el apoderado de la parte convocante podrá enviar el escrito de subsanación con la constancia de recibido por la parte convocada y de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado al correo electrónico [mardila@procuraduria.gov.co](mailto:mardila@procuraduria.gov.co).

Se reiteró la solicitud el 28 de octubre de 2020 en los siguientes términos: Buenas tardes nuevamente estamos remitiendo al correo electrónico [administrativo@rebus.com.co](mailto:administrativo@rebus.com.co) el mensaje en el que se evidencia que se dio trámite a su solicitud de conciliación presentada el 30 de septiembre de 2020 y se le solicitó procediera a subsanar el mismo en los términos señalados en el auto del 15 de octubre de 2020 que se adjunta al presente mensaje, tal como

se hizo anteriormente. Por tanto, se le solicita nuevamente subsanar la solicitud de conciliación en los términos del auto anteriormente citado para lo cual se le transcribe el mensaje antes enviado”.

En virtud de las anteriores actuaciones, no se evidencia que la Procuraduría General de la Nación, actualmente vulnere y/o ponga en riesgo los derechos aludidos por la accionante, pues como bien se advierte ya se le dio trámite a la solicitud presentada por la actora; no obstante al encontrarse deficiencia en los requisitos presentados para la solicitud y trámite de conciliación extrajudicial, procedió conforme el ordenamiento lo autoriza, esto es, inadmitir la solicitud, sin que la accionante haya estado atenta a la carga que le corresponde.

Sobre los requisitos para que proceda la acción de tutela como mecanismo transitorio la Corte Constitucional ha dicho:

*“La noción de perjuicio que trae el inciso 2° del numeral 1° del art. 6° del Decreto 2591 y que en su noción básica reproduce el inciso primero del art. 1° del Decreto 306 de 1992, contiene dos elementos que permiten su precisión, a fin de que su amenaza autorice el uso de la acción de tutela como mecanismo transitorio: el primero referido a su carácter “irremediable” y el segundo a que sólo pueda ser reparado en su integridad mediante “indemnización”. Se entiende por irremediable el daño para cuya reparación no existe medio o instrumento. Es el daño o perjuicio que una vez se produce, no permite retrotraer las circunstancias al estado anterior a la vulneración del derecho; y en este sentido debe tomarse la expresión “perjuicio irremediable”. El segundo elemento así lo viene a confirmar cuando predica que el daño, trátase de sus categorías moral ó material, que tiene bien acogidas la jurisprudencia colombiana de tiempo atrás, cuando de considerar la eventualidad del perjuicio irremediable se trata puede ser indemnizado en su integridad”. (Sentencia T-468, del 17 de julio de 1992)”.*

De lo anterior se advierte, que no se ésta frente a un perjuicio irremediable, pudiendo la accionante en cualquier tiempo proceder a elevar nueva solicitud de conciliación ante la entidad accionada.

En consecuencia y conforme a lo ya expresado concluye este despacho Constitucional que no se está vulnerando el derecho al debido proceso, por lo tanto, no es procedente que por intermedio del mecanismo Constitucional pueda hacerse efectivas las pretensiones de la peticionaria.

**EN MÉRITO DE LO EXPUESTO, EL JUZGADO TREINTA DE FAMILIA DE BOGOTÁ D.C., ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,**

### **RESUELVE**

**PRIMERO: NO TUTELAR** los derechos fundamentales **AL DEBIDO PROCESO POR MORA JUDICIAL INJUSTIFICADA** invocados la ciudadana **JULIANA MARGARITA VILLALBA** identificada con la C.C 52.866.228 en calidad de representante legal de la sociedad comercial **REBUS TECHNOLOGY S.A.S** contra la **PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.**

**SEGUNDO:** Contra el presente fallo procede impugnación por la vía jerárquica.

**TERCERO:** Remitir el expediente a la Honorable Corte Constitucional, para la eventual revisión del fallo de tutela, en caso de no ser impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación.

**CUARTO:** Notificar esta decisión a las partes por el medio más expedito. Librense comunicaciones.

**NOTIFÍQUESE,**



**Firmado Por:**

**VIVIANA MARCELA PORRAS PORRAS**

**JUEZ**

**JUEZ - JUZGADO 030 DE CIRCUITO FAMILIA DE LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C.-SANTAFE DE BOGOTA  
D.C.,**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo  
dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **1ce448474b7705bbd1a3acba55f09ee5aa00e17be44e57c18a5bd2c221726656**

Documento generado en 30/10/2020 07:43:16 p.m.

**Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**  
**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**